

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
JUZGADO DEL TRABAJO III

ACTUACIONES N°: 1614/18



H103034185673

JUICIO: VALDEZ MARIA DEL CARMEN c/ CITYTECH S.A. s/ COBRO DE PESOS. Expte. N° 1614/18.

San Miguel de Tucumán, 19 de diciembre de 2022.

REFERENCIA: Para dictar sentencia definitiva en este proceso caratulado: “Valdez María Del Carmen C/ Citytech S.A. s/Cobro de Pesos”, Expte N° 1614/18, que tramitó ante este Juzgado del Trabajo de la III Nom.

ANTECEDENTES

1.1. En 09/11/2018 se presentó la letrada Daiana Vilurón (MP 9215), en representación de la actora María del Carmen Valdez, DNI 32.892.880, con domicilio en Malabia 1636, 1° piso A, San Miguel de Tucumán, conforme poder especial para este juicio (poder *ad litem*) que adjuntó en 12/04/2019.

En ese carácter, promovió demanda contra Citytech, por la suma de \$385.409,01, más intereses y costas, por los conceptos de indemnización por antigüedad, haberes del mes de septiembre 2017, sueldo anual complementario (SAC) segundo semestre 2017, vacaciones proporcionales restantes, indemnización sustitutiva del preaviso y SAC sobre preaviso, integración del mes de despido y SAC sobre integración, y multa art. 2 Ley 25323.

Manifestó que la trabajadora Valdez ingresó a trabajar para la demandada en 09/03/2009, hasta su egreso en 21/09/2017, producido por despido sin causa dispuesto por la empleadora.

Denunció una jornada laboral de lunes a viernes de 09 a 18 horas, y que prestó servicios en el edificio de “Teleperformance”, en calle Junín n° 168, San Miguel de Tucumán.

En cuanto a sus tareas, señaló que la accionante se desempeñó como asesora de atención al cliente, supervisora de la campaña “personal”, y detalló una serie de tareas efectuadas en el área

de recursos humanos de la empresa.

Detalló que ocupó la categoría de “Analista de Recursos Humanos”, y que percibía una remuneración de \$20.955.

Relató que en 19/06/2017 la empleadora, ante solicitud de la actora Valdez, autorizó el otorgamiento de vacaciones adeudadas 2016 (del 03/07/2017 al 23/07/2017), un adelanto vacacional 2017 (del 24/07/2017 al 30/07/2017), y un mes de licencia sin goce de haberes (del 01/08/2017 al 30/08/2017).

Explicó que la fecha pactada para su reincorporación a tareas habituales era el día 01/09/2017, pero que, circunstancias ajenas a la trabajadora y encontrándose fuera del país, se vio impedida de regresar.

Ante ello, señaló que se comunicó con sus superiores, principalmente con Adrián Alberto Alagastin y Matías Moores, vía aplicación de mensajería *Whatsapp*, en donde informó su imposibilidad de retornar al país y su intención de reincorporarse a sus tareas. Indicó que propuso como solución la extensión de licencia sin goce de sueldo, o que se complete el período vacacional 2017.

Manifestó que, ante la postura negativa de la accionada, remitió carta documento internacional en donde notificó las circunstancias expuestas, e informó su fecha de retorno y reincorporación a sus actividades.

Alegó que, desde el momento del envío de la carta documento, hasta su efectivo regreso al país, perdió contacto con sus empleadores.

Relató que en 02/10/2017 se presentó en su lugar de trabajo, pero le fue impedido su ingreso y se le comunicó que estaba desvinculada de la empresa.

En consecuencia, señaló que la actora remitió telegrama laboral (TCL) en 02/10/2017 en donde solicitó que se aclare su situación laboral.

Expuso que la demandada contestó por CD del 05/10/2017, en donde alegó que el vínculo laboral se encontraba extinguido por abandono de trabajo de la accionante, y procedió a transcribir la misiva.

Indicó que la trabajadora remitió TCL en 13/10/2017 rechazando la CD de su empleadora.

Negó que la actora haya recibido intimación alguna para reincorporarse a su puesto de trabajo, y bajo apercibimiento de encuadrarla en la figura del abandono de trabajo.

Reiteró que la accionante había manifestado claramente su intención de reincorporarse, a través de los mensajes enviados a sus supervisores, y que, por tanto el despido fue injustificado.

Argumentó que la demandada hizo abuso en sus facultades disciplinarias y de dirección, no habiendo proporcionalidad entre la falta imputada y la sanción.

Practicó planilla de liquidación de rubros, fundó su derecho y solicitó el progreso de la acción.

1.2. En 12/04/2019 la actora presentó documentación original, y procedió a ampliar su demanda.

Agregó a sus rubros el reclamo de indemnización por daño moral, el que estimó en la suma de trece sueldos, con fundamento en los arts. 178, 182 y 245 de la LCT.

Argumentó que el despido, además de incausado, fue discriminatorio y nulo.

2. Corrido el traslado de ley, en 30/05/2019 se presentó el letrado Lucas Penna (MP 7855), en representación de Citytech SA, con domicilio en Av. Adolfo de la Vega n° 245, San Miguel de Tucumán, conforme poder para juicios adjuntado y contestó la demanda.

Efectuó una negativa particularizada de los hechos y de la documentación de la actora.

En su versión de los hechos, reconoció la relación laboral con la actora, y que cumplió tareas en el sector de recursos humanos de la empresa, con un cargo administrativo fuera de convenio, por el que percibía un salario básico superior al del convenio aplicable a la actividad.

Reconoció las fechas de ingreso y egreso de la actora, y que la extinción del vínculo se produjo por despido directo con fundamento en el abandono de trabajo.

Del mismo modo, reconoció la jornada laboral de la actora (lunes a viernes de 09 a 18 horas).

Relató que la accionante solicitó un adelanto de vacaciones y una licencia con goce de haberes, a los fines de realizar una especialización en el exterior, los que fueron concedidos por la empresa.

Manifestó que la trabajadora debía reintegrarse a sus tareas en 01/09/2017, pero que no se presentó en la fecha pactada, sin informar ni justificar sus inasistencias.

Ante ello, expuso que la empleadora remitió en 08/09/2017 carta documento (CD) en donde intimó a la actora a retomar tareas, bajo apercibimiento de extinguir el vínculo por abandono de trabajo.

Señaló que, ante la falta de respuesta de la trabajadora, remitió CD en 21/09/2017 en donde comunicó la extinción del vínculo por su exclusiva culpa y responsabilidad por abandono de trabajo.

A continuación, detalló el resto del intercambio epistolar entre las partes, en iguales términos que la accionante.

Argumentó que las CD remitidas a la actora fueron enviadas al domicilio denunciado en su declaración jurada y en el contrato de trabajo suscriptos por ella. Por tanto, consideró que las notificaciones fueron válidas, aún cuando la trabajadora no haya tomado efectivo conocimiento de las mismas.

Señaló que le fue abonada a la actora la liquidación final, y se pusieron a disposición los certificados de trabajo, e impugnó el progreso de la multa del art. 2 Ley 25323.

Hizo reserva del caso federal y solicitó el rechazo de la demanda, con costas.

En 02/07/2019 acompañó documentación original, descripta en nota actuarial del 03/07/2019.

3. La causa fue abierta a prueba en 28/08/2019 a los fines de su ofrecimiento.

En 07/11/2019 tuvo lugar la audiencia del art. 69 del CPL, con comparecencia personal de la actora María del Carmen Valdez y su letrada apoderada, y sin la comparecencia de la parte demandada y su letrado apoderado, en donde consta el fracaso de la misma.

Secretaria actuaria informó en 18/10/2022 sobre la actividad probatoria de las partes.

Por decreto del 04/11/2022 se tuvo por presentados en término los alegatos de la parte actora y demandada respectivamente.

Finalmente, en 18/11/2022 pasó la presente causa para el dictado de sentencia definitiva.

ANÁLISIS DEL CASO Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA

1. Conforme surge de los términos de la demanda y de su contestación, son hechos admitidos y, por ende, exentos de prueba, los siguientes: existencia de la relación laboral entre la actora Valdez y la demandada Citytech SA; fecha de ingreso en 09/03/2009; extinción del vínculo laboral en 21/09/2017; jornada laboral de la actora (45 horas semanales); que prestó servicios en el sector de recursos humanos de la empresa como empleada fuera de convenio; licencia de la actora entre el 03/07/2017 y 31/08/2017; intercambio epistolar desde octubre 2017.

La parte demandada realiza un desconocimiento de la documentación presentada por la actora consistente en: recibo de sueldo de septiembre 2017, TCL nº 090864711, telegrama internacional con número de seguimiento VV077859833ES, fotos de mensajes vía *whatsapp*, y copias simples de correos electrónicos intercambiados con superiores. Por lo que considero que cumple con lo dispuesto por el art. 88 del CPL, teniéndose por negada la mencionada documentación.

En cuanto a las copias de recibos de sueldo acompañados por la actora correspondientes a los períodos 05 y 06 de 2017, la accionada no efectuó negativa alguna, por lo que corresponde tenerlos por auténticos, de acuerdo a lo previsto en el referido art. 88 del CPL, sin que obre prueba en contrario, criterio que también sostiene el máximo tribunal local (CSJT, Sent. Nº 318 del 04/05/2000, "Posse Aida Elizabeth vs. RU-MAR Turismo y Otro - s/Cobros").

La actora reconoció los contenidos y sus firmas en la documentación ofrecida por la parte demandada, con excepción de las cartas documento, las cuales desconoció ya que no cuentan con firma. En cuanto a los recibos de sueldo manifestó no reconocer los que no contienen su firma, con excepción del recibo del período 09/2017.

En consecuencia, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las que debo pronunciarme, conforme el art. 214 inc. 5 del CPCYC (suple.) son las siguientes: 1) Causal y justificación de despido; 2) Procedencia de los rubros e importes reclamados.

Se tratan a continuación y por separado cada una de las cuestiones litigiosas, poniendo de resalto que, por imperio del principio de relevancia, el Juez analizará únicamente aquellas probanzas que considere conducentes para la resolución de la causa.

Primera Cuestión

Causal y justificación del distracto.

1. Expuso la actora en su demanda que en 02/10/2017 le fue impedido el ingreso a su lugar de trabajo, por lo que remitió TCL a su empleadora en la misma fecha para que le aclare su situación laboral.

Relató que la demandada contestó por CD el 05/10/2017 en donde le comunicó que el vínculo laboral había sido extinguido por abandono de trabajo de la accionante. La accionada, en su misiva, expuso que había remitido cartas documento de intimación en 08/09/2017 y de despido en 21/09/2017.

La trabajadora negó haber recibido intimación alguna.

Por otro lado, reconoció que le fue concedida una licencia laboral, que efectuó un viaje al exterior, y que debía reintegrarse a sus tareas en 01/09/2017; pero argumentó que, por razones ajenas a ella, no pudo regresar al país en la fecha pactada, y que se comunicó con sus superiores dejando en claro su intención de retornar y retomar sus tareas.

2. La empleadora demandada, en su contestación, relató que la actora no se presentó a trabajar desde el 01/09/2017, el día posterior a la finalización de su licencia.

Ante ello, señaló que le remitió CD en 08/09/2017 en donde la intimó a presentarse a su lugar de trabajo bajo apercibimiento de extinguir el vínculo por abandono de trabajo.

Ante la falta de respuesta de la actora, indicó que remitió CD en 21/09/2017, en donde comunicó la extinción del vínculo, por la causal de abandono de trabajo.

3. Corresponde analizar las pruebas pertinentes para la resolución de esta cuestión:

3.1. En el cuaderno de pruebas A3 el Correo Argentino autenticó los telegramas de la actora del 02/10/2017 y 17/10/2017, e informó sus respectivas fechas de imposición.

Respecto al telegrama internacional acompañado por la actora del 12/09/2017, informó que ingresó al país en 22/09/2017, y que ante la falta de pago del arancel de tasa de aduana, la misiva fue devuelta a la remitente en 02/11/2017.

3.2. La Perito CPN Hilda Soledad Sánchez presentó dictamen en el cuaderno de prueba A2.

3.3. En el cuaderno A4 la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Tucumán (SET) remitió el expediente administrativo 14131/18-V-2017.

3.4. La audiencia confesional del cuaderno A6 no aporta datos relevantes al proceso, y se trata de una ratificación de la postura de la demandada al contestar la demanda.

3.5. En el cuaderno D3, ante el desconocimiento de la actora de las cartas documento acompañadas por la demandada como documentación, manifestado en audiencia del 07/11/2019, se ofició al Correo Argentino a los fines de que informe sobre la autenticidad de las misivas.

En su informe, el correo autenticó la CD del 05/10/2017, informado su fecha de imposición.

Respecto al resto de las misivas, informó que era necesario contar con copias legibles respecto a sus elementos (los nueve dígitos del número de identificación, sus sellos de oficina de procedencia, contenido del texto, y remitentes y destinatarios).

Lo informado por el Correo Argentino fue notificado a las partes en la oficina del 29/03/2021, de acuerdo a las constancias del sistema informático, sin que la parte accionada, interesada en la producción de esta prueba, acompañe copias legibles o efectúe presentación alguna.

3.6. El resto del material probatorio, si bien analizado en su totalidad, resulta inconducente para la resolución de esta cuestión.

En particular, la testimonial producida en el cuaderno de prueba de la actora n° 5 no aporta datos relevantes para la resolución de esta cuestión, o las posteriores cuestiones de análisis.

Por tanto, resulta inoficioso expedirme sobre las tachas interpuestas por la demandada contra el testimonio brindado, pues no será valorado para lo que se resuelve en esta sentencia.

4. Resulta entonces que la empleadora invocó, como causal de despido, la configuración del abandono de trabajo por parte de la actora, en los términos del art. 244 de la LCT.

La doctrina y la jurisprudencia concuerdan en señalar que el abandono de trabajo previsto en el art. 244 LCT exige -para que el empleador quede exento de consecuencias indemnizatorias- la concurrencia de tres requisitos imprescindibles: a) formal: intimación previa al

trabajador para que se presente a trabajar dentro de un plazo razonable (nunca inferior a 2 días hábiles por aplicación analógica del art. 57 LCT; b) objetivo: inasistencia o no concurrencia del trabajador a su puesto de trabajo; c) subjetivo: intención o ánimo deliberado del trabajador de no presentarse a cumplir sus tareas (cfr. Cámara del Trabajo, Sala 1, Expte. 243/21, Sentencia nº 48 del 21/04/2022).

En mérito a lo antes expuesto, y a los elementos aportados a la causa, considero que la decisión rupturista adoptada por la empleadora con fundamento en el art. 244 de la LCT no resultó ajustada a derecho, pues no se encuentra acreditado que la demandada haya dado cumplimiento con los requisitos legales, en particular, con la intimación a la trabajadora y la comunicación del distracto.

En su demanda, la actora negó haber recibido las cartas documento alegadas por la demandada de intimación y de despido.

Sin perjuicio de que reconoció que debió reintegrarse a sus tareas en 01/09/2018, pese a lo cual no prestó servicios durante el mes de septiembre de 2017, era carga de la demandada el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por el art. 244 de la LCT para configurar el instituto del abandono de trabajo.

El Correo Argentino, ante el desconocimiento de la actora hacia las misivas en cuestión, informó la imposibilidad de autenticarlas con fundamento en la ilegibilidad de las copias acompañadas.

Pese a ello, la parte demandada no efectuó diligencia alguna tendiente a acreditar su autenticidad, remisión y recepción

Es decir, la empleadora no demostró el cumplimiento con las notificaciones de intimación y posterior despido a la trabajadora, estando a su cargo la prueba de estos hechos conforme a las reglas que rigen la materia (Art. 322 CPCYC de aplicación supletoria).

Por lo expuesto propongo tener por injustificado el despido directo por abandono de trabajo dispuesto por el empleador, lo que torna procedente las indemnizaciones de ley a favor de la trabajador Valdez. Así lo declaro.

5. En cuanto a la fecha del despido, la parte actora reconoció que el vínculo laboral se extinguió en 21/09/2017, pese a lo cual impugnó la causal y justificación.

Ello, además se condice con la fecha de baja ante AFIP, adjuntada por la demandada y suscripta y reconocida por la

accionante.

Por tanto, sin perjuicio del incumplimiento de la demandada de los requisitos formales para la configuración del abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la LCT, se toma como fecha del distracto, a todos los efectos, el 21/09/2017, al no tratarse de un hecho controvertido entre las partes. Así lo declaro.

Segunda Cuestión

Rubros e importes.

Pretende la actora el pago de la suma de \$385.409,01, por los conceptos de indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso y SAC sobre preaviso, integración del mes de despido y SAC sobre integración, haberes del mes de septiembre 2017, SAC segundo semestre 2017, vacaciones proporcionales restantes, y multa art. 2 Ley 25323. Reclamó además daño moral o indemnización especial, con fundamento en los arts. 178, 182 y 245 de la LCT.

Reclamó además daño moral o indemnización especial, con fundamento en los arts. 178, 182 y 245 de la LCT.

Atento a lo analizado al tratar las cuestiones precedentes, y conforme a lo previsto por el art. 214, inciso 6 del CPCYC (supl.) se analizarán cada concepto pretendido por separado:

1. Indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso y SAC sobre preaviso: la trabajadora tiene derecho a estos conceptos por encontrarse injustificado el despido directo, conforme lo tratado en la primera cuestión y lo normado por los Arts. 232 y 245 de la LCT. Así lo declaro.

2. Haberes del mes de septiembre 2017, integración del mes de despido y SAC sobre integración: la actora no tiene derecho a estos rubros, por cuanto se encuentra reconocido que no prestó servicios durante el mes de septiembre de 2017, sin que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas. Así lo declaro.

3. SAC proporcional segundo semestre 2017 y vacaciones proporcionales no gozadas: teniendo en cuenta el recibo de liquidación final acompañado por la demandada y reconocido por la actora, no corresponde el pago de este rubro.

4. Multa art. 2 Ley 25323: la accionante tiene derecho a este concepto, ya que se encuentra probado que por TCL del 17/10/2017 -autenticada por el Correo Argentino en el cuaderno A3-, intimó

de modo fehaciente el pago de las indemnizaciones legales vencido el plazo de cuatro días hábiles de producida la extinción del vínculo (ocurrida el 21/09/2017), conforme a lo previsto por los arts. 255 bis y 128 de la LCT. Por ello, se hace lugar en el 50 % de las indemnizaciones por antigüedad y preaviso. Así lo declaro.

5. Daño moral o indemnización especial: reclamó la actora indemnización por daño moral, al afirmar que se produjo un despido discriminatorio que denota un trato desigual de la empresa hacia la trabajadora.

En su planilla de liquidación de rubros, cuantificó el concepto en la suma de 13 de salarios, y lo denominó como “indemnización especial arts. 178, 182 y 245 LCT”.

Si bien la ruptura de un contrato laboral produce por lo general un daño moral al trabajador, las leyes que fijan cualitativamente los extremos de la indemnización toman en consideración el conjunto de todos estos posibles daños.

Por tanto, no corresponde indemnización por daño moral, a menos que la decisión de romper el vínculo fuera precedida de imputaciones desdorosas, cargos infamantes o cualquier actitud del empleador causante de perjuicios morales mayores que los comunes que afecten a cualquier trabajador despedido (CNAT, Sala V, 12/12/1996, DT 1997-B-1382).

Por otra parte, las indemnizaciones de los arts. 178 y 182 de la LCT refieren a despidos causados por razones de embarazo o matrimonio, situaciones que no fueron alegadas ni probadas en esta causa.

En consecuencia, no habiéndose configurado una situación especial distinta de la prevista en las indemnizaciones tarifadas, en mérito a lo expuesto precedentemente, y tratándose de un rubro de procedencia excepcional, corresponde rechazar el mismo. Así lo declaro.

Los rubros declarados procedentes deberán ser calculados de acuerdo a los recibos de sueldo acompañados y reconocidos por las partes (recibos del 05/2017 y 06/2017 acompañados por la actora, y recibo del 09/2017 acompañado por la demandada), tomando como base la mejor remuneración percibida durante el último año del distracto.

Intereses: Atento a la doctrina fijada por la SCJT, en autos “Olivares, Roberto Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo s/

Daños y Perjuicios”, sentencia N° 937/2014, del 23/09/2014, en la que se establece que el procedimiento para el cálculo de los intereses constituye una cuestión propia de la prudente valoración de los jueces, dejando sin efecto el estatus de doctrina legal establecido por el mismo Tribunal en el caso “Galletini Francisco vs. Empresa Gutiérrez SRL s. Indemnizaciones”, sentencia N° 443, del 15/06/2004, propongo la aplicación al caso de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago.

Ello por entender que dicha tasa es la que corresponde a las circunstancias socio económico actual, tal como lo han entendido numerosos tribunales en todo el país. Así, por caso, las Cámaras Nacionales del Trabajo, mediante acta N° 2357/2002, del 7 de mayo de 2002, en la que se dispuso su vigencia a partir del 6 de enero de 2002, y el plenario “Samudio de Martínez c/ Transportes 260 SA s/ daños y perjuicios”, del 20/04/2009, de las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil.

En efecto, y tal como lo expresó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza: *“Una tasa -como la pasiva-, que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios, no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda. Es por ello, que la tasa de interés debe cumplir, además, una función moralizadora evitando que el deudor se vea premiado o compensado con una tasa mínima, porque implica un premio indebido a una conducta socialmente reprochable. Al tratarse de deudas reclamadas judicialmente debe existir un plus por mínimo que sea que desaliente el aumento de la litigiosidad”* (“Amaya, Osvaldo D. c/Boglioli, Mario” del 12/9/05; LL Gran Cuyo, 2005 -octubre-, 911-TySS2005, 747-IMP2005-B, 2809”).

La tasa pasiva del BCRA no cumple con los fines y propósitos resarcitorios de los intereses ya que no representa fielmente el incremento de las remuneraciones, determinando, como consecuencia, que el acreedor laboral (que es un sujeto de preferente tutela constitucional -art. 14 bis CN- y en los tratados sobre derechos humanos -art. 75.22 CN-) vea menguado su crédito, con claro conculcamiento de las garantías de igualdad ante la ley (art. 16 CN); de propiedad (art. 17 CN) y de indemnidad (art. 19). Por otra parte, el “quantum” de la tasa pasiva, que se venía aplicando hasta ahora en los tribunales locales, no sólo no logra realizar la justicia del caso sino que, como resultado, premia el incumplimiento como conducta social (Drucaroff Aguiar, Alejandro, “La

modificación del plenario Uzal. Una cuestión esencial no resuelta", La Ley, 4/9/03).

Por lo demás, la aplicación de la tasa activa no es incompatible con la prohibición de indexar establecida por las Leyes 23928 y 25561, ya que no debe interpretarse que la tasa de interés deba divorciarse de la realidad, ni de los principios constitucionales de justicia, equidad, protección al trabajo y propiedad, a los que debe subordinarse, puesto que una ley jamás puede prevalecer sobre la Carta Magna.

Por ello, se dispone aplicar al caso la tasa de interés precedentemente referenciada. Así lo considero.

Planilla de Capital e Intereses

Ingreso	09/03/2009
Egreso	21/09/2017
Antigüedad	8 años, 6 meses y 12 días

CCT: Fuera de convenio

Remuneración

Remuneración s/ recibos reconocidos	\$ 18.662,00
-------------------------------------	--------------

1) Indemnización por antigüedad

\$ 18.662,00 x 9 años	\$ 167.958,00
-----------------------	---------------

2) Indemnización Sustitutiva de Preaviso

\$ 18.662,00 x 2 meses	\$ 37.324,00
------------------------	--------------

3) SAC s/ Preaviso

\$ 37.324,00 / 12	\$ 3.110,33
-------------------	-------------

4) Art. 2 Ley 25.323

(\$ 167.958 + \$37.324) x 50%	\$ 102.641,00
---------------------------------	---------------

Total rubros 1 a 4

\$ 311.033,33

Interés tasa activa BNA desde 27/09/17 al 30/11/22

235,24% \$ 731.659,26

Total condena en \$ al 30/11/2022

\$ 1.042.692,60

$$\text{Demanda prospera por: } \frac{\text{Capital rubros que prosperan}}{\text{Capital demanda}} \times 100$$

80,70%

Costas: Atento al progreso parcial de la demanda y lo normado en el art. 63 CPCYC las costas procesales se imponen en proporción al éxito obtenido por cada parte en las siguientes proporciones: la parte demandada Citytech SA por resultar parcialmente vencida soportará sus propias costas, más el 80% de las devengadas por la actora Valdez, debiendo ésta cargar con el 20% de las propias.

Honorarios: Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la

presente causa, conforme lo prescribe el artículo 46 inciso “b” de la Ley 6204.

Atento el resultado arribado en el juicio la naturaleza del mismo, es de aplicación el artículo 50 inciso “a” de la citada Ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto de condena, el que según planilla precedente resulta al 30/11/2022 la suma de \$1.042.692,60.

Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 15, 38, 42, 59 y concordantes de la Ley 5480 y 50 y 51 del CPL, con los topes y demás pautas impuestas por la Ley 24432 ratificada por Ley provincial 6715, se regulan los siguientes honorarios:

1) Al letrado Daiana Vilurón (MP 9215), por su actuación en doble carácter por la actora en las tres etapas del proceso de conocimiento, el 14% de la base de regulación con más el 55%, equivalente a la suma de \$226.264,29 (pesos doscientos veintiséis mil doscientos sesenta y cuatro con 29/100)

2) Al letrado Lucas Patricio Penna (MP 7855), por su actuación en doble carácter por la demandada Citytech SA en las tres etapas del proceso de conocimiento, y teniendo en cuenta que en su alegato argumentó sobre cuestiones no controvertidas en este proceso, tales como la jornada de trabajo de la actora, el convenio aplicable o el progreso de la multa del art. 80 LCT, corresponde regular el 6% de la base de regulación con más el 55%, equivalente a la suma de \$96.970,41 (pesos noventa y seis mil novecientos setenta con 41/100).

3) A la Perito CPN Hilda Soledad Sánchez, por su labor pericial en el cuaderno de pruebas del actor n° 2, el 3% de la base de regulación, equivalente a la suma de \$31.280,78 (pesos treinta y un mil doscientos ochenta con 78/100).

Por ello,

RESUELVO

I- ADMITIR parcialmente la demanda promovida por María del Carmen Valdez, DNI 32.892.880, con domicilio en Malabia 1636, 1° piso A, San Miguel de Tucumán, contra CITYTECH SA, CUIT 30-70908678-9, con domicilio en Av. Adolfo de la Vega n° 245, San Miguel de Tucumán.

En consecuencia, **se condena** a la demandada a abonar en el plazo de diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ley, la suma de **\$1.042.692,60 (pesos un millón**

cuarenta y dos mil seiscientos noventa y dos con 60/100) a favor de la actora, por los conceptos de indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso y SAC sobre preaviso, y multa art. 2 Ley 252323.

II- ABSOLVER a la demandada Citytech SA de lo reclamado en concepto de haberes de septiembre 2017, integración del mes de despido, SAC proporcional 2017, vacaciones proporcionales y SAC sobre integración, e indemnización por daño moral.

III- COSTAS, conforme a lo considerado.

IV- HONORARIOS: 1) Al letrado **Daiana Vilurón** (Mp 9215, la suma de \$226.264,29 (pesos doscientos veintiséis mil doscientos sesenta y cuatro con 29/100). 2) Al letrado **Lucas Patricio Penna** (Mp 7855), la suma de \$96.970,41 (pesos noventa y seis mil novecientos setenta con 41/100). 3) A la Perito CPN **Hilda Soledad Sánchez**, la suma de \$31.280,78 (pesos treinta y un mil doscientos ochenta con 78/100).

V- PLANILLA FISCAL: oportunamente practicar y hacer reponer (Art. 13 Ley 6204).

VI- COMUNICAR a la Caja Previsional de Abogados y Procuradores de Tucumán.

REGISTRAR, ARCHIVAR Y HACER SABER. 1614/18.KGE

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=KUTTER Guillermo Ernesto, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20218946829, Fecha:19/12/2022;
La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>